

Plaza pública  
Para la edición del 8 de febrero de 1996.

## Tabasco

Miguel Angel Granados Chapa

En 60 pozos, de los 926 que hay en Tabasco, se ha centrado la acción de los miembros del Partido de la Revolución Democrática que está siendo combatida con la fuerza pública, con propaganda amañada y con trampas legales. La mayor parte de las instalaciones cuyo acceso ha sido obstruido están fuera de producción, por lo que esgrimir el fantasma del desabasto para instigar la arbitrariedad en nombre del "estado de derecho", es una falacia pero pavimenta el camino de la solución despótica. Ayer se inició la escalada que conduce a ella: Junto con varios de sus compañeros, ayer fue lesionado levemente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente local perredista, en uno de los desalojos resistidos pasivamente por los impugnadores de la política de Pemex en Tabasco. El senador priísta Amador Rodríguez Lozano pidió ayer también iniciar los trámites que culminarían en el desafuero del senador Auldárico Hernández Jerónimo, que con López Obrador encabeza esta movilización. Y Rafael Lopez Cruz, presidente del comité estatal del PRD, fue aprehendido junto con media docena de miembros de su comité.

Se dirá que no puede ser tolerada la ruptura del orden legal, y la interrupción de la normalidad laboral en una empresa que por tantos títulos es la más relevante de

todas en nuestro país. Pero se dispone de una visión corta si no se examina la rebelión contra Pemex en una perspectiva histórica. Y se practicará el autoengaño si se insiste en que se trata de una actitud facciosa de López Obrador, al que se presenta como empeñado a toda costa en conseguir fines meramente personales, ya sea la gubernatura de Tabasco (o por lo menos la caída de quien fue su adversario en la lucha electoral), ya sea el liderazgo del Partido de la Revolución Democrática.

Estas dos últimas circunstancias están sin duda presentes en la movilización perredista, pero no la determinan y menos constituyen su causa única. La oposición (que no está representada sólo por el PRD, sino también y muy activamente por Juan José Rodríguez Pratts, que siendo diputado priísta se pasó al Partido Acción Nacional, del que fue candidato y hoy es un ardoroso militante, poseído por el fuego del converso) ha concentrado su lucha contra la ilegalidad de que es fruto el actual gobierno, en mostrar las infracciones a la normatividad electoral y sus derivados: es inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre si la investigación acerca del voluminoso gasto de campaña de Roberto Madrazo debe ser federal o local. El punto principal en ese frente es la documentación original que prueba un gasto de 70 millones de dólares (al tipo de cambio de 1994), cuando lo autorizado por la ley no llegaba siquiera a dos. Naturalmente, puede inferirse que la movilización contra Pemex en este momento busca crear un clima en que el fallo judicial sea adverso a Madrazo, opuesto a que la Procuraduría

General de la República averigüe sus gastos. Pero aun si fuera esa la causa, no es la única causa: Pemex ha tejido una extensa tela de dónde cortar.

Lo mismo puede decirse de la posición de López Obrador ante el proceso de sucesión interna del PRD. Ni siquiera están trazadas las líneas para el relevo de Porfirio Muñoz Ledo, y hasta sería posible que López Obrador eligiera concentrarse en su lucha tabasqueña antes que pujar por el liderazgo nacional de su partido. Pero suponiendo que el dirigente tabasqueño sea candidato, y sin mengua de la calidad de sus eventuales adversarios (Amalia García, Heberto Castillo, Jesús Ortega y Jesús Martín del Campo) se puede anticipar que el peso de López Obrador dentro de su partido le ofrece una ancha posibilidad de triunfo. No tiene necesidad de invertir tanta energía, correr tantos riesgos, en pos de un cargo que quizá no anhela y que podría conseguir por otros medios. De todas maneras, aun si se hubiera obnubilado y pretendiera acrecentar su presencia en el PRD apareciendo como campeón en la lucha contra una política petrolera que empobrece y ensucia, hay tela de donde cortar.

López Obrador alega que el campo petrolero Sen, donde se produjo un segundo desalojo ayer, tras el inicial del viernes pasado, se asienta en 15,000 hectáreas pertenecientes a cuatro ejidos, cuyos titulares soportaron la invasión petrolera sin recibir a cambio ni siquiera explicaciones, menos aún la indemnización correspondiente. Y el fenómeno, con variantes, se ha repetido en muchas otras comunidades, desde que se

posó sobre Tabasco esa mezcla de bendición y maldición que es el petróleo, fuente al mismo tiempo de riqueza y de empobrecimiento.

Pemex ha informado de sus aportaciones a la economía de Tabasco durante 1995, en una especie de gesto de extrañeza por el alzamiento civil y pacifista en torno de sus instalaciones. En ese año, la empresa petrolera nacional aplicó un total de 277.627 millones de pesos a apoyar el desarrollo social de esa entidad. Más de la mitad de esa cifra (176.765) fue dedicada a obras de infraestructura y a estudios sobre las consecuencias ambientales del trabajo petrolero, y 35.610 millones de pesos se aplicaron al apoyo de proyectos productivos. A eso se agregan otras sumas de donaciones en especie (59,540) y las aportaciones hechas por Pemex ante accidentes climáticos del año pasado (5,712). La cifra total puede ser baja si se la compara con la riqueza extraída del subsuelo tabasqueño. Pero aún así es una suma importante, que palia el efecto adverso de la explotación petrolera. O debería mitigarlo, si el gobierno local lo aplicara conforme a lo pactado con Pemex. Pero la empresa sugiere que carece de información al respecto. Por lo menos, sólo asegura que el gobierno del estado se comprometió "a informar periódicamente a Pemex sobre la aplicación de los recursos financieros y materiales, así como del avance de las obras, proyectos y acciones descritas". Pero no dice que ese compromiso se haya cumplido, y menos lo prueba ofreciendo al público los datos correspondientes.

# PLAZA PÚBLICA

## MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

# Tabasco

Aunque sea eficaz la propaganda tendiente a distorsionar la movilización perredista contra la política petrolera en el sureste, lo cierto es que la explotación de gas y crudo ha generado agravios, que se mitigarían con dinero, si éste llegara a su destino.



EN 60 POZOS, DE LOS 926 QUE HAY EN TABASCO, se ha centrado la acción de los miembros del Partido de la Revolución Democrática que está siendo combatida con la fuerza pública, con propaganda amañada y con trampas legales. La mayor parte de las instalaciones cuyo acceso ha sido obstruido están fuera de producción, por lo que esgrimir el fantasma del desabasto para instigar la arbitrariedad en nombre del "Estado de derecho", es una falacia pero pavimenta el camino de la solución despótica. Ayer se inició la escalada que conduce a ella: junto con varios de sus compañeros, ayer fue lesionado levemente Andrés Manuel López Obrador, el dirigente local perredista, en uno de los desalojos resistidos pasivamente por los impugnadores de la política de Pemex en Tabasco. El senador priísta Amador Rodríguez Lozano pidió ayer también iniciar los trámites que culminarían en el desafuero del senador Auldárico Hernández Jerónimo, que con López Obrador encabeza esta movilización. Y Rafael López Cruz, presidente del comité estatal del PRD, fue aprehendido junto con media docena de miembros de su comité.

Se dirá que no puede ser tolerada la ruptura del orden legal, y la interrupción de la normalidad laboral en una empresa que por tantos títulos es la más relevante de todas en nuestro país. Pero se dispone de una visión corta si no se examina la rebelión contra Pemex en una perspectiva histórica. Y se practicará el autoengaño si se insiste en que se trata de una actitud facciosa de López Obrador, al que se presenta como empeñado a toda costa en conseguir fines meramente personales, ya sea la gubernatura de Tabasco (o por lo menos la caída de quien fue su adversario en la lucha electoral), ya sea el liderazgo del Partido de la Revolución Democrática.

Estas dos últimas circunstancias están sin duda presentes en la movilización perredista, pero no la determinan y menos constituyen su causa única. La oposición (que no está representada sólo por el PRD, sino también y muy activamente por Juan José Rodríguez Pratts, que siendo diputado priísta se pasó al Partido Acción Nacional, del que fue candidato y hoy es un ardoroso militante, poseído por el fuego del converso) ha concentrado su lucha contra

la ilegalidad de que es fruto el actual gobierno, en mostrar las infracciones a la normatividad electoral y sus derivados: es inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre si la investigación acerca del voluminoso gasto de campaña de Roberto Madrazo debe ser federal o local. El punto principal en ese frente es la documentación original que prueba un gasto de 70 millones de dólares (al tipo de cambio de 1994), cuando lo autorizado por la ley no llegaba siquiera a dos. Naturalmente, puede inferirse que la movilización contra Pemex en este momento busca crear un clima en que el fallo judicial sea adverso a Madrazo, opuesto a que la Procuraduría General de la República averigüe sus gastos. Pero aun si fuera esa la causa, no es la única causa: Pemex ha tejido una extensa tela de dónde cortar.

Lo mismo puede decirse de la posición de López Obrador ante el proceso de sucesión interna del PRD. Ni siquiera están trazadas las líneas para el relevo de Porfirio Muñoz Ledo, y hasta sería posible que López Obrador eligiera concentrarse en su lucha tabasqueña antes que pujar por el liderazgo nacional de su partido. Pero suponiendo que el dirigente tabasqueño sea candidato, y sin mengua de la calidad de sus eventuales adversarios (Amalia García, Heberto Castillo, Jesús Ortega y Jesús Martín del Campo) se puede anticipar que el peso de López Obrador dentro de su partido le ofrece una ancha posibilidad de triunfo. No tiene necesidad de invertir tanta energía, correr tantos riesgos, en pos de un cargo que quizá no anhela y que podría conseguir por otros medios. De todas maneras, aun si se hubiera obnubilado y pretendiera acrecentar su presencia en

**El senador Auldárico Hernández, uno de los encabezadores de la movilización perredista contra la explotación petrolera inmisericorde, puede perder su fuero si prospera la maniobra iniciada en su contra en el Congreso.**

el PRD apareciendo como campeón en la lucha contra una política petrolera que empobrece y ensucia, hay tela de donde cortar.

López Obrador alega que el campo petrolero Sen, donde se produjo un segundo desalojo ayer, tras el inicial del viernes pasado, se asienta en 15 mil hectáreas pertenecientes a cuatro ejidos, cuyos titulares soportaron la invasión petrolera sin recibir a cambio ni siquiera explicaciones, menos aún la indemnización correspondiente. Y el fenómeno, con variantes, se ha repetido en muchas otras comunidades, desde que se posó sobre Tabasco esa mezcla de bendición y maldición que es el petróleo, fuente al mismo tiempo de riqueza y de empobrecimiento.

Pemex ha informado de sus aportaciones a la economía de Tabasco durante 1995, en una especie de gesto de extrañeza por el alzamiento civil y pacifista en torno de sus instalaciones. En ese año, la empresa petrolera nacional aplicó un total de 277.627 millones de pesos a apoyar el desarrollo social de esa entidad. Más de la mitad de esa cifra (176.765) fue dedicada a obras de infraestructura y a estudios sobre las consecuencias ambientales del trabajo petrolero, y 35.610 millones de pesos se aplicaron al apoyo de proyectos productivos. A eso se agregan otras sumas de donaciones en especie (59 mil 540) y las aportaciones hechas por Pemex ante accidentes climáticos del año pasado (5 mil 712). La cifra total puede ser baja si se la compara con la riqueza extraída del subsuelo tabasqueño. Pero aun así es una suma importante, que palia el efecto adverso de la explotación petrolera. O debería mitigarlo, si el gobierno local lo aplicara conforme a lo pactado con Pemex. Pero la empresa sugiere que carece de información al respecto. Por lo menos, sólo asegura que el gobierno del estado se comprometió "a informar periódicamente a Pemex sobre la aplicación de los recursos financieros y materiales, así como del avance de las obras, proyectos y acciones descritas". Pero no dice que ese compromiso se haya cumplido, y menos lo prueba ofreciendo al público los datos correspondientes.

•••

### CAJÓN DE SASTRE

Admito sin más la aclaración del senador Oscar López Velarde, expresada en la carta que ayer publicó *Reforma*. Explico que lo creí un político-transportista por inferencia debido a que: 1) Hubo ya un senador (suplente) con ese apellido, que 2) es oriundo también de Aguascalientes, y 3) representa a un sector de camioneros. Se trata de J. Guadalupe López Velarde, actual delegado en esa entidad de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo.